

Emilio Terrero y Perinat, un reformista al frente del gobierno general de Filipinas (1885-1888)

MARÍA DOLORES ELIZALDE PÉREZ-GRUESO
(*Instituto de Historia, CSIC, España*)

Resumen: En este trabajo se presenta un estudio crítico de la política reformista llevada a cabo por el teniente general Emilio Terrero y Perinat durante su mandato como gobernador general de Filipinas, en los años 1885 a 1888, y de los efectos que tuvo sobre el acontecer de las islas y la convivencia entre distintos grupos de población. Terrero, un militar nombrado por los conservadores, pero que ejerció buena parte de su tarea con los liberales, aplicó en el archipiélago importantes reformas decididas por el gobierno metropolitano, como fueron el esfuerzo por una mayor asimilación de las islas a la Península, la aplicación de los códigos civil y penal en Filipinas, la aprobación de un nuevo código de comercio, la introducción de los gobernadores civiles y de los juzgados de primera instancia como una forma de separar el poder ejecutivo del judicial, el fomento del castellano como lengua común de todas las autoridades, peninsulares e indígenas, el desarrollo de las infraestructuras, o los intentos por restringir el poder de las órdenes religiosas en la vida policia del archipiélago.

Ello le ganó el aprecio de aquellos sectores convencidos de la necesidad de modernizar la administración de las islas, así como de buena parte de las élites filipinas. Sin embargo, le granjeó la oposición de los partidarios del mantenimiento del statu quo en las islas, a fin de no alentar corrientes independentistas, y muy especialmente de las órdenes religiosas, con las que mantuvo serios enfrentamientos que llevaron a su destitución.

En el artículo se refleja, así, la lucha entablada entre reformistas y antirreformistas y la reacción de los filipinos ante esas tensiones, evidenciada en los incidentes de Binondo, en la manifestación de marzo de 1888 o en las misivas enviadas a la reina defendiendo la gestión de Terrero y sus colaboradores.

Palabras Clave: Filipinas. Política colonial española. Emilio Terrero. Gobernador General de Filipinas. Reformismo y modernización de Filipinas. Órdenes Religiosas.

Abstract : This paper presents a critical study of the reform policy pursued by Lieutenant General Emilio Terrero and Perinat during his tenure as governor general of the Philippines in the years 1885-1888, and also analyzes the effects it had on the events of the islands and coexistence between different population groups. Terrero, a military appointed by the Conservatives, but who held much of his work with the Liberals, applied in the archipelago important reforms decided by the metropolitan government, as were the efforts for greater assimilation of the islands to the metropolis, the application of the civil and criminal codes in the Philippines, the approval of a new commercial code, the introduction of civil governors and district courts as a way of separating the executive from the judicial power, the promotion

of Castilian as a common language for all authorities, Spaniards or Indians, the development of infrastructures and the attempts to restrict the power of the religious orders in the political life of the archipelago.

This endeared him to those sectors convinced of the need to modernize the administration of the islands, as well as much of the Filipino elite. However, he garnered opposition from supporters of maintaining the status quo on the islands in order to not encourage separatist currents, and especially of religious orders, with whom Terrero had serious clashes that led to his dismissal.

In the article thus is reflected the struggle between reformists and anti-reformists and the reaction of Filipinos to those tensions, evidenced in the incidents of Binondo, in the demonstration of March 1888 and in the letters sent to Queen defending the government of Terrero and his collaborators.

Keywords: Philippines, Spanish, colonial policy, Emilio Terrero, gobernador general de Philippines, reformism modernization, religious orders.

Introducción

En este trabajo se presenta un estudio crítico de la política reformista llevada a cabo por el teniente general Emilio Terrero y Perinat durante su mandato como gobernador general de Filipinas, en los años 1885 a 1888, y de los efectos que tuvo sobre el acontecer de las islas y la convivencia entre distintos grupos de población. Terrero, un militar nombrado por los conservadores, pero que ejerció buena parte de su tarea con los liberales, fue un hombre comprometido con su función, la cual trató de desempeñar con honestidad, aplicando a las islas las reformas decididas por el gobierno metropolitano a fin de mejorar la administración de las islas, pensando en lo mejor para Filipinas y para los filipinos¹. Al contrario de lo que ocurrió con muchos de sus antecesores y sucesores, quienes al llegar a Manila determinadas órdenes metropolitanas paralizaban las reformas, considerando que serían perjudiciales para el país y para el orden social de las islas, Terrero introdujo en Filipinas reformas importantes, que modernizaron la gestión, profesionalizaron el desempeño de las funciones administrativas e impulsaron una mayor asimilación de las islas a la situación de la Península, siguiendo la política conscientemente promovida por el gobierno, primero para Cuba y Puerto Rico, y luego para Filipinas, y también uno de los grandes objetivos de las élites filipinas de aquel momento.

Quizás por ello, Emilio Terrero fue un gobernador muy apreciado tanto por los círculos reformistas del archipiélago como por los cónsules extranjeros, capaces de advertir los beneficios de su actuación. Y sin embargo, al tiempo, Terrero fue uno de los gobernadores más denostados por todos aquellos que defendían el mantenimiento del *statu quo* en las islas y se resistían a la aplicación de reformas que cambiaran la situación, considerando que ello solo serviría para dar nuevas alas a aquellos sectores que cuestionaban el régimen colonial, poniendo en peligro la soberanía española sobre las islas. Fue criticado también con dureza por cuestionar el papel que desempeñaban las órdenes religiosas dentro de la administración colonial y por tratar de reducir su injerencia en la vida política del archipiélago, razón por la cual se granjeó la enemistad de las congregaciones. Ello le valió durísimos juicios históricos que han prevalecido en la historiografía española. Sin embargo, la labor de este gobernador general bien merece una revisión crítica.

Breve semblanza de un gobernador

El teniente general Emilio Terrero y Perinat (20 de noviembre de 1827-24 de febrero de 1892) nació en Sevilla, en el seno de una familia de honda tradición militar, alguna práctica política y formación académica –su abuelo fue catedrático en el Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, donde se formaban los médicos de la Armada; su padre, general de Estado Mayor, profesor de militares en la Academia de Artillería y en la Escuela de Estado Mayor, y miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales-. Emilio Terrero se formó en el Colegio General Militar de Madrid y en la Escuela de Estado Mayor, obteniendo el grado de teniente en 1850. Fue destinado a Cataluña y posteriormente a África, donde estuvo varios años, y a Valencia, donde, en 1859, se casó con Matilde Badía y Verges, una joven de la burguesía valenciana. Posteriormente, entre otros puestos, fue nombrado, en 1872, jefe de

¹ Este trabajo se ha realizado en el marco de dos proyectos: por un lado, "Le renouveau impérial des États ibériques: une globalisation originale? (1808-1930)", GLOBIBER, financiado por la Agence Nationale de la Recherche (Francia), y por otro, "La modernización de Filipinas, 1868-1898" (HAR2015-66511-P), financiado por el Plan Nacional de Investigación (España).

Estado Mayor del Ejército del Norte, participando en numerosas batallas de la tercera guerra carlista; en 1875, subsecretario del Ministerio de la Guerra; en 1879, capitán general de Andalucía; en 1881, primer ayudante del rey Alfonso XII; y en 1883, capitán general de Castilla la Nueva. Finalmente, en 1885, se le designó gobernador general de Filipinas, donde permaneció hasta marzo de 1888. Una vez acabada la etapa filipina, fue nombrado presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra, su último cargo, que desempeñó hasta noviembre de 1890. Al final de su vida sufrió una enfermedad mental irreversible y murió trágicamente en Madrid, arrojándose por un balcón, cuando contaba solo 65 años².

Terrero fue un hombre moderado y de talante abierto. Se distinguió por su valor en la batalla y por su modestia y honradez en el desempeño de los cargos. Se le ha definido como minucioso, organizado e incansable en el trabajo, severamente ordenancista, enérgico en el mando, indeciso en las decisiones, afectuoso con los subalternos y querido por los que le rodeaban³. Independiente y de ideas propias, no se afilió a ningún grupo político, y ello se reflejó tanto en la ausencia de respaldos firmes como en los juicios que recibió, donde con frecuencia los liberales le achacaron un rígido y autoritario conservadurismo y los conservadores le acusaron de masón y anticlerical.

Esa misma indefinición política se reflejó en su mandato. Fue nombrado gobernador general de Filipinas el 12 de febrero de 1885 por el gobierno conservador de Antonio Cánovas del Castillo, siendo ministro de Ultramar Aguirre de Tejada, y sin embargo, tras un cambio de gobierno en la Península debido a la muerte del rey Alfonso XII y al Pacto de El Pardo, desempeñó el cargo durante el gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta, siendo ministros de Ultramar Germán Gamazo (27 de noviembre de 1885-10 de octubre de 1886) y Víctor Balaguer (10 de octubre de 1886-14 de junio de 1888). Ocupó el puesto del 5 de abril de 1885 al 15 de marzo de 1888. Para entonces era ya viudo y acudió a las islas acompañado de su hijo Ricardo y de su sobrino Alfonso Perinat. En Filipinas se apoyó en dos capaces subordinados: el gobernador civil de Manila, José Centeno García, ingeniero de minas con una inusual experiencia de veinte años en Filipinas, y el director general de la Administración Civil, Benigno Quiroga López Ballesteros, un hombre más joven que había sido diputado liberal en las Cortes⁴.

Algún autor sin ninguna simpatía por los liberales en el archipiélago y muy crítico con este gobernador general ha señalado que Terrero “fue primero, mientras tuvo a su lado a Canga-Arguelles, un carlista disfrazado; después, un incoloro versátil, y últimamente, reflejándose en él las figuras de Quiroga y de Centeno, un demócrata arbitrario”. Me estoy refiriendo, en concreto, al retrato que hizo Wenceslao Retana de Terrero en su obra sobre el mando del general Weyler en Filipinas, que ha tenido una influencia decisiva en los juicios posteriores que se han elaborado en la historiografía filipinista, perviviendo una visión muy negativa de aquel gobernador⁵. También José Montero y Vidal, uno de los autores más clásicos para el

² C. NAVASQUILLO, *Gobierno y política de Filipinas bajo el mandato del general Terrero*. También, J. CELDRÁN, *Instituciones hispanofilipinas del siglo XIX* y “*La administración municipal de Filipinas*”.

³ *España en Fin de siglo, Apuntes biográficos Terrero*.

⁴ B. ANDERSON, *Bajo tres banderas*. p. 99.

⁵ W. RETANA, *Mando del General Weyler en Filipinas* p. 19. Y es que Retana no era un cualquiera en estas lides, sino uno de los filipinistas más reputados, que ha tenido una larga proyección sobre estudios posteriores. Así, Wenceslao Emilio Retana y Gamboa (1862-1924) periodista, historiador, bibliógrafo y político español, fue uno de los principales filipinistas del XIX. En 1884, con veintidós años, llegó a Filipinas como funcionario de Hacienda. Además, durante los seis años que permaneció en el archipiélago desplegó una gran actividad como periodista. En Manila fue redactor de *La Oceanía Española* y subdirector de *La Opinión*. En 1890 regresó a España por razones de salud, y quedó adscrito al Ministerio de Ultramar. En Madrid fue colaborador de *La*

estudio de Filipinas en el siglo XIX, fue duro en sus juicios sobre la actuación de Terrero, en especial por la conducta seguida durante el conflicto hispano-alemán suscitado en las islas Carolinas⁶. La prensa de la época, en general, fue poco objetiva con Terrero, y dependiendo del momento y de la orientación política del periódico, recibió grandes críticas –la mayoría- y alguna encendida alabanza –las menos-. Al principio las alabanzas procedieron de la prensa conservadora y las críticas de los liberales. Luego se cambiaron las tornas, sin alcanzar nunca la debida medida⁷. Y sin embargo, la etapa de gobierno de Emilio Terrero y Perinat como gobernador general de Filipinas fue un tiempo de especial interés en la historia de las islas por los muchos procesos entonces iniciados y por la actitud dialogante mostrada ante las demandas filipinas.

La actuación de Terrero en Filipinas

Terrero llegó a Filipinas en un momento de gran competencia internacional por ocupar nuevos espacios en el Pacífico. Era el tiempo de la Conferencia de Berlín, en la cual se había manifestado el auge de las ambiciones imperialistas de las potencias, que habían arbitrado nuevas condiciones para la expansión colonial y la defensa de territorios históricos sin ocupación formal. En esas circunstancias, el gobierno español temió que Alemania, Gran Bretaña, o alguna otra potencia manifestaran su interés por las posesiones españolas en aquel ámbito, en el cual ya habían efectuado acciones contrarias a la soberanía española. Por ello dio instrucciones a Terrero de defender las áreas insuficientemente dominadas a fin de evitar cualquier intervención. De ahí el viaje del nuevo gobernador general a Mindanao, cinco días después de llegar a las islas, y también su preocupación por llevar a cabo lo antes posible la ocupación formal de las islas Carolinas, que ya estaba en marcha desde hacía varios meses⁸.

Entre las actuaciones más notables de Terrero en Filipinas se puede señalar una decidida política en pro de la transformación y mejora de la administración en las islas, traducida en una serie de medidas muy significativas. Entre ellas destacó, en primer lugar, la aplicación del Código Civil y del Código Penal de la Península en Filipinas, una cuestión que generó un gran debate en las islas en torno a si era conveniente, o no, desarrollar una política asimilista en Filipinas, al igual que se había hecho en las Antillas a partir de 1879.

En tal sentido se había manifestado la Comisión Codificadora de Ultramar, que había recomendado promover la asimilación, declarando que no se podían admitir “diferencias fundadas en las razas de color y libres, sino en cuanto fueran conducentes a una igualdad absoluta para los efectos de la ley”. Insistió en que el proyecto para la aplicación de una política asimilista en Filipinas se había redactado “inspirándose en el principio de la igualdad ante la ley”, advirtiendo que establecer una ley de razas sería peligroso para el archipiélago filipino, “fomentando la animadversión y el odio”, siendo “incompatible con los progresos de la época”. Aconsejó, sin embargo, que los tribunales aplicaran la ley con flexibilidad,

España Oriental, El Porvenir de Bisayas, La Política de España en Filipinas, La Época, Heraldo de Madrid, El Nacional, La España Moderna, Nuestro Tiempo (1903), *Raza Española, Boletín de la Academia de la Historia, o La Política Moderna*. Con frecuencia usaba el seudónimo "Desengaños" para escribir en diferentes publicaciones. En 1924 fue nombrado académico de la Historia. Llegó a ser también diputado a Cortes y gobernador civil de varias provincias, entre ellas Huesca y Teruel. Sobre Retana, ver A. CAULÍN MARTÍNEZ, "Retana y la historiografía filipinista".

⁶ J. MONTERO Y VIDAL, *El archipiélago filipino*, p. 490.

⁷ C. NAVASQUILLO, *Gobierno y política...*, pp. 22-28.

⁸ Alocución de Terrero al llegar a Filipinas. *Gaceta de Manila*, 5 de abril de 1885.

teniendo en cuenta los diferentes casos y circunstancias. Así, puntualizó que en el artículo 11 se establecía que los jueces debían tener en consideración “si el reo era indígena, mestizo o chino” “para atenuar o agravar las penas, según el grado de instrucción respectivo, la naturaleza del hecho y las condiciones de la persona ofendida, quedando al prudente arbitrio de aquellos”. Advirtió también que se tuviera especial cuidado con los delitos políticos que pudieran poner en peligro el gobierno español en las islas o atentar contra la integridad del territorio. Estableció igualmente alguna normativa particular para las singularidades que presentaban las islas Filipinas, pero por lo demás se recomendó aplicar el mismo código civil y penal que en la Península⁹.

Ante el informe de la Comisión Codificadora de Ultramar, el entonces ministro de Ultramar en el gobierno de Cánovas, Manuel Aguirre de Tejada, ordenó al gobernador general de Filipinas, el 4 de septiembre de 1884, que se aplicaran en las islas los códigos vigentes en la Península¹⁰. Sin embargo, Joaquín Jovellar consideró conveniente dejar la orden sin efecto, señalando que el asunto solo podría conllevar graves inconvenientes políticos. “Si la legislación de cada país” -decía- “ha de estar en armonía con sus necesidades, sus costumbres, su ilustración y su espíritu, no puede ser desde luego apropiado para este país ningún Código Penal que lo sea para ese [la Península], porque no sólo difieren mucho uno de otro, sino que en nada absolutamente son parecidos”. Era imposible, afirmaba, comparar el estado de la población filipina con la peninsular: “ni raza, ni cultura, ni tendencias, ni vida pública y privada, nada en fin, así en lo físico como en lo moral, tiene entre ambos la mera semejanza”. Y concluía: “No solo entiendo pues, que no puede regir con buen resultado el mismo Código de la Península en Filipinas, sino que en rigor ni aún un mismo Código debiera regir por igual, con idéntico criterio de aplicación en todo, en las provincias del Archipiélago, tan diferentes entre sí”. Advertía, como era habitual en estos casos, que cualquier transformación en ese sentido podía alentar movimientos políticos indeseados: “Podía también esta concesión dar motivo para que con más o menos fundamento alimentasen esperanzas de cambios políticos para los cuales, como se ve por lo que queda expuesto, está muy lejos de hallarse preparado este país...”¹¹. De acuerdo con los criterios del gobernador general, la cuestión quedó de momento paralizada.

Meses más tarde, al producirse el cambio en el Ejecutivo, el gobierno de Sagasta decidió reactivar la aplicación de una política asimilista entre las poblaciones de los distintos territorios, considerando que tendría un efecto positivo en Filipinas. Por ello, el 17 de diciembre de 1886, el entonces ministro de Ultramar, Víctor Balaguer, le envió orden en tal sentido a Terrero, quien publicó la nueva normativa adoptada, con las reflexiones correspondientes, en la *Gaceta de Manila* del 13 de marzo de 1887¹². Posteriormente, tras recibir un nuevo informe elaborado al respecto por la Comisión Codificadora de Ultramar¹³, el gobierno aprobó la Ley de Enjuiciamiento Civil para Filipinas, en la cual se contemplaban

⁹ Exposición de la Comisión Codificadora de Ultramar, 17 de julio de 1884. El texto se publicó en la *Gaceta de Manila*, 13 de marzo de 1887.

¹⁰ Real Decreto de 4 de septiembre de 1884.

¹¹ Carta del ministro de Ultramar, Manuel Aguirre de Tejada, al gobernador general de Filipinas, Joaquín Jovellar, 4 de septiembre de 1884. Carta del gobernador general de Filipinas, Joaquín Jovellar, al ministro de Ultramar, Aguirre de Tejada, explicando las razones por las cuales no se había implantado el Código Penal en Filipinas, 8 de febrero de 1885. Archivo Histórico Nacional (Madrid) (en adelante AHN), Ultramar, 2257/1º, Exp. 10. C. NAVASQUILLO, *Gobierno y política...*, pp. 210-227.

¹² Real Orden de 17 de diciembre de 1886. *Gaceta de Manila*, 13 de marzo de 1887.

¹³ Memoria presentada el 8 de octubre de 1887.

las casuísticas particulares necesarias para las islas¹⁴. Siguiendo escrupulosamente las órdenes del gobierno, y respetando las instrucciones recibidas en el sentido de preservar la igualdad ante la ley, Emilio Terrero, implementó la medida dentro de lo posible, dada la falta de personal cualificado para muchas de las tareas previstas. La cuestión, no obstante, despertó encendidas críticas entre aquellos que consideraban que el archipiélago no estaba preparado para una política asimilista¹⁵.

Otra medida fundamental adoptada durante el mandato de Terrero fue la creación de los gobernadores civiles y de los jueces de primera instancia, a través de los cuales se trataba de reordenar la vida provincial y de distinguir las labores ejecutivas de las judiciales, fomentando la separación de poderes. Anteriormente, los alcaldes mayores habían desempeñado al tiempo el poder ejecutivo y el judicial. Sus tareas se separaron con la definición de dos figuras distintas, encargadas cada cual de tareas diferentes. Por un lado, los gobernadores civiles, creados por Real Orden de 5 de marzo de 1886, eran los representantes del gobernador general en la provincia y se ocupaban, entre otras tareas, de publicar y hacer que se cumplieran las leyes y las órdenes del gobierno; mantener el orden público y proteger a las personas y a las propiedades; publicar bandos de buen gobierno y de higiene pública; presidir las principalías y las elecciones de gobernadorcillos, a quienes nombraban, controlaban y cesaban; formar y ejecutar los presupuestos provinciales y municipales, rindiendo cuenta de ello; promover el desarrollo económico y las obras públicas; controlar a los funcionarios y el buen funcionamiento de la administración; promover la instrucción pública; desarrollar el castellano; presidir el sorteo de los quintos y vigilar el cumplimiento del servicio militar; revisar la recaudación de impuestos; controlar los censos; ocuparse de los desastres naturales, etcétera. Estaba previsto, sin embargo, que pudieran también decretar la detención preventiva y poner a disposición judicial a un sospechoso, realizar primeras diligencias en averiguación de delitos que llegaran a su conocimiento, y aplicar penas menores determinadas en las leyes¹⁶. Por otra parte, los juzgados de primera instancia se instauraron en Filipinas por Real Orden de 27 de Abril de 1886, tratando de profesionalizar la justicia por medio de personal formado académicamente para la tarea, bien abogados, bien funcionarios de la carrera judicial. La medida hubo de afrontar, sin embargo, la falta de personal idóneo para el desempeño del cargo en numerosos lugares, por lo que con frecuencia eran sustituidos por interinos legos que contravenían las reglas fijadas. Ello permitió que los gobernadorcillos siguieran desempeñando determinadas labores judiciales en causas menores, ejerciendo las funciones de los jueces de paz, lo cual, aunque estaba fijado por la normativa, contradecía la deseada separación de poderes.

Durante el gobierno de Terrero se aprobó también una serie de normas importantes, como un Real Decreto, anterior a la aplicación del Código Penal, en el cual se dictaban medidas preliminares para la organización de la justicia y los tribunales, entre ellos los jueces de paz, con una directa repercusión en la vida de los pueblos¹⁷; la organización de los municipios y de las elecciones de gobernadorcillos¹⁸; distintas medidas recordando la necesidad de que los filipinos que desempeñaran cargos públicos dentro de la administración hablaran, leyeran y escribieran castellano, así como la obligación de que las familias enviaran a sus hijos a las

¹⁴ Ley aprobada el 3 de febrero de 1888. En ella se fijaba la organización de los tribunales y el procedimiento civil y criminal que se debía seguir en las islas.

¹⁵ Aplicación del Código Penal en Filipinas, AHN, Ultramar, 2243, exp. 7.

¹⁶ *Gaceta de Manila*, 21 de abril de 1886. C. NAVASQUILLO, *Gobierno y política...*, pp. 241-250.

¹⁷ Real Decreto del 29 de mayo de 1885, AHN, Ultramar, 2249, Exp. 85.

¹⁸ *Gaceta de Manila*, 13 de junio de 1885.

escuelas para aprender castellano¹⁹; o la aplicación de un nuevo Código de Comercio que impulsó el desarrollo de nuevas actividades y fue muy bien acogido por los inversores de las islas²⁰.

Terrero fomentó, además, las obras públicas y mejoró las infraestructuras y, en esa línea, a mediados de 1887 llevó la luz eléctrica a las orillas del Pasig, de forma que los barcos pudieran entrar en puerto tras la puesta del sol; en junio de 1887 aprobó la construcción de una línea de ferrocarril entre Manila y Dagupan; e inauguró el monumento a Carlos IV, con una pequeña fuente, en la plaza mayor de Manila²¹. Fue también el gobernador que desde Manila colaboró en la organización de la Exposición sobre Filipinas que se celebró en Madrid en 1887, promovida por el ministro Balaguer, a fin de dar a conocer las riquezas y potencialidades de las islas y fomentar el comercio y las inversiones. La eficacia y el buen hacer de Terrero se pusieron de manifiesto a la hora de coordinar las muchas iniciativas que distintas instancias del archipiélago emprendieron para enviar muestras a la exposición²².

Tuvo también acciones muy destacadas en la consolidación del proyecto colonizador, al reafirmar la presencia española en dos áreas hasta entonces poco controladas, Mindanao y la Micronesia. Así, nada más llegar Terrero a Filipinas se embarcó para inspeccionar el sur del archipiélago²³ y de forma inmediata inició una campaña en Mindanao, poniéndose al frente de las tropas, para acabar con la rebelión del dato Uto, con quien consiguió firmar la paz en marzo de 1888²⁴.

De igual forma, procedió a la ocupación efectiva de las islas Carolinas y Palaos, decidida por razones políticas y estratégicas relacionadas con la defensa de la soberanía española en la Micronesia y con el rechazo a ceder estas islas a la influencia de alguna otra potencia interesada en este ámbito. Con objeto de controlar bien aquel amplio espacio, el gobierno de Cánovas decidió crear una colonia con dos estaciones navales, en Yap y en Ponapé, a consecuencia de lo cual tuvo que afrontar un grave conflicto con Alemania que le disputó el dominio sobre este área del Pacífico, desembarcando en Yap e izando su bandera una noche, por sorpresa, cuando los españoles ya habían llegado a las islas para proceder formalmente a su ocupación, pero aún no habían constituido oficialmente el nuevo gobierno político-militar. Aquel inesperado enfrentamiento, que provocó una patriótica reacción popular en la metrópoli, se resolvió por medio de la mediación del papa León XIII, que refrendó la soberanía española sobre aquel ámbito, pero concedió derechos de explotación y comercio a Alemania. Una vez resuelta la cuestión, durante el mandato de Terrero se procedió a la creación efectiva de las dos divisiones navales y al desarrollo de la colonia, proceso en el cual se hubieron de dirimir diversos problemas, entre ellos una primera rebelión en la isla de Ponapé en 1887 y algunos enfrentamientos con extranjeros asentados en las islas, resueltos

¹⁹ *Gaceta de Manila*, 15 de noviembre de 1885.

²⁰ Real Decreto de 6 de agosto de 1888, AHN, Ultramar, 2852, Exp. 99.

²¹ D. CUBEIRO, *Comunicaciones, Infraestructuras y Desarrollo en Filipinas*. P. LUENGO, «El monumento a Carlos IV en Manila».

²² L.Á. SÁNCHEZ, *Un imperio en la vitrina*.

²³ El 16 de abril de 1885 Terrero partió a reconocer el sur del archipiélago, visitando la Paragua, Calamianes, Mindanao, Archipiélago de Joló y Tawi-Tawi y las islas Visayas, y regresando a Manila el día 30 de mayo.

²⁴ R. ILETO, *Magindanao, 1860-1888: The Career of Datu Utto*.

con mucha voluntad y esfuerzo, a fin de reafirmar el objetivo político y estratégico de mantener el gobierno español en estos archipiélagos²⁵.

Valoraciones de la política seguida por Terrero

La decidida política reformista acometida por Terrero agradó a aquellos sectores que consideraban que había que modernizar la administración del archipiélago, asimilándolo a la situación peninsular y tomando en consideración las principales demandas de la población de las islas. Fue respaldada también por buena parte de los filipinos, tanto de sectores criollos como de las tradicionales principalías indígenas y los nuevos grupos emergentes -ilustrados, campesinos, trabajadores urbanos, comerciantes...-

Hubo, sin embargo, sectores que se opusieron tajantemente a las reformas, creyendo que era una política equivocada que solo podía causar desorden y problemas en el gobierno de las islas:

El General Terrero, mal aconsejado por algunos de sus allegados, había hecho durante el último año de su mando una política desatentada... Durante el período de su gobierno (1885-1888) fueron implantadas por el de la Metrópoli reformas de extraordinaria transcendencia, que causaron en las Islas un desorden espantoso"... "El planteamiento del Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Civil, y la creación de los jueces de paz, todo ello en tiempo de Terrero, no estando aún el país preparado para recibir tales reformas, fueron también hechos de transcendencia suma, que provocaron conflictos por docenas y por consiguiente que, lejos de reportar beneficio, ocasionaron gravísimos trastornos²⁶.

Desde los mismos círculos se señaló que la supresión de los alcaldes mayores, decidida por Gamazo en 1886, y la creación en su lugar de la figura de los gobernadores civiles, que en su opinión tenían por lo general escasa experiencia del país y poco conocimiento de su situación, pronto causó importantes problemas. Las nuevas autoridades provinciales ejercieron su labor sin tener necesariamente en cuenta a las fuerzas vivas tradicionales, ni seguir los cauces de gobierno habituales, por lo que no tardaron "en tener choques con los jueces, los párrocos y otras personas del elemento oficial". Choques que se acentuaron extraordinariamente cuando el director general de la administración civil, Benigno Quiroga, dictó unas disposiciones que afectaban a los religiosos, tramitando las órdenes por conducto de los jefes de provincias, los que a su vez las transmitieron a los gobernadorcillos, quienes debían vigilar que los párrocos las cumplieran. La comunicación directa de los gobernadores civiles con los gobernantes filipinos pareció entonces una trasgresión intolerable: "dijérase que, más que otra cosa, el señor director civil perseguía, allende perjudicar á los párrocos, molestarles". Las prácticas habituales dictaban que eran los párrocos quienes ejercían de intermediarios entre las diferentes esferas de poder. Esa infracción, se señaló, "socavaba el legendario prestigio de los frailes" y "llevaba la perturbación moral y aun material a todos los ámbitos de aquel dominio español", y por tanto era uno de los peores perjuicios que se podía hacer al gobierno español

²⁵ MD. ELIZALDE, *España en el Pacífico: la colonia de las islas Carolinas y Palaos*.

²⁶ W. RETANA, *Weyler...*, p. 7 y p. 23.

de las Filipinas²⁷. Se subrayó especialmente “la transcendencia que en un país colonial, tan especial como lo es Filipinas, tiene el hecho de que los gobernadorcillos, indios, impongan la ley á los religiosos, peninsulares, que por sus antecedentes históricos y su significación político-social, debieran vivir á buen recaudo de tales procedimientos”²⁸.

Dada la política seguida por Terrero, el gobernador tuvo una relación conflictiva con las órdenes religiosas presentes en Filipinas. La tensión se acrecentó por varios motivos. En primer lugar, antes de que Terrero llegara a las islas, con ocasión de unas reformas fiscales, se decidió una disminución en los salarios del clero que el nuevo gobernador tuvo que implementar. Ello provocó que todas las instancias religiosas del archipiélago se manifestaran en contra de la medida, señalando que llevaría a buena parte de los religiosos a una situación indigna de su condición que desprestigiaría gravemente su imagen y mermaría sus posibilidades de supervivencia, además de ponerles en una situación de agravio comparativo con el clero de la Península y de las demás colonias ultramarinas, cuando era en Filipinas donde su misión exigía más sacrificios y respondía a mayores necesidades²⁹.

La brecha aumentó cuando el gobernador aplicó con vigor las leyes que retiraban la justicia municipal a los mandatarios locales y se la otorgaban a los nuevos jueces de paz y a los jueces de primera instancia. Como hemos visto, el efecto deseado de tal medida era separar el poder judicial del ejecutivo, profesionalizando la justicia, pero con ello se redujo también el poder de los frailes, que tenían un fuerte ascendente sobre los gobernantes locales y los tribunales municipales, que eran las instancias anteriormente ocupadas de impartir justicia en causas menores, y por ello no agradó a las órdenes religiosas³⁰.

Las congregaciones criticaron también con dureza la política de atracción desarrollada por Terrero con los filipinos y las celebraciones en las que, a su parecer, el gobernador había alternado demasiado íntimamente con los gobernadorcillos. En ese sentido, fueron muy comentadas las fiestas de cumpleaños del gobernador y las rondallas populares que los filipinos le ofrecieron en tales ocasiones.

Debido a las malas relaciones con el gobernador, durante el mandato de Terrero, los religiosos cuestionaron el funcionamiento del Real Patronato, según el cual, por un privilegio concedido por el papa a los Reyes Católicos, los monarcas seguían teniendo el derecho a participar en la elección de los obispos, proceso en el cual el gobierno consultaba con los gobernadores generales³¹. Dadas las tensas relaciones existentes, el clero de Filipinas solicitó que cesara la injerencia del poder civil en asuntos eclesiásticos, y en particular el recabo de la opinión de los gobernadores de las islas: “Nosotros creemos y confesamos que en materia religiosa ni debemos ni podemos recibir órdenes e instrucciones sino de Su Santidad o de V.E. que es su digno representante en los dominios de S. M. Católica”³². En ese sentido, el obispo de Cebú, fray Martín, llegó a denunciar la simbiosis entre las autoridades de gobierno y la masonería, señalando que a las órdenes religiosas les era imposible defenderse de los ataques que tenían

²⁷ W. RETANA, *Weyler...*, p. 25 y 19.

²⁸ W. RETANA, *Weyler...*, pp. 19-20.

²⁹ C. NAVASQUILLO, *Gobierno y política...*, pp. 516-536.

³⁰ B. ANDERSON, *Bajo tres banderas...*, p. 99. JA. INAREJOS, *Los últimos caciques de Filipinas*.

³¹ AHN, Ultramar, 2246, Exp. 4.

³² Archivo de la Nunciatura de Madrid, Expediente 584, Título X, Rúbrica I—II.

que hacer frente porque el vicepatrono real –Terrero- contemporizaba con las opiniones de los masones, que eran los que ejercían de hecho el poder en Filipinas³³.

La relación con José Rizal

Otro importante tema de conflicto entre el gobernador y determinados círculos de la colonia, y entre ellos de nuevo las congregaciones, el arzobispo y los obispos, giró en torno a la relación de Terrero con José Rizal y su actuación ante la publicación de la novela *Noli me tangere*, cuestiones ambas que esos sectores evaluaron muy desfavorablemente³⁴. En 1887, Rizal, que a esas alturas era ya el líder más reconocido del movimiento nacionalista³⁵, publicó en Berlín la que iba a ser su primera novela, quizás la obra por la que iba a ser más conocido. Tuvo una tirada inicial pequeña, de dos mil ejemplares, y no fue fácil enviarla a Filipinas, pero a pesar de ello tuvo un gran impacto tanto en la Península como en el archipiélago, quizás porque hasta entonces ningún autor -y menos uno filipino- había analizado de tal manera la vida en Filipinas, los efectos del régimen colonial en la sociedad de las islas y el papel de las órdenes religiosas dentro de esa estructura. Pese a que la novela no rechazaba la relación con España, sino que defendía simplemente una política reformista, condenando la revolución armada, fue recibida con hostilidad por distintos círculos de la colonia, y tildada de subversiva por las órdenes religiosas, a raíz de los juicios vertidos sobre ellas. Tanto el arzobispo de Manila como las propias congregaciones exigieron que el libro se prohibiera por herético y calumnioso, y que se castigara severamente al autor³⁶.

Terrero no atendió a sus reclamaciones, ni retiró el libro, sino que cuando Rizal volvió a Filipinas, en agosto de 1887, el gobernador general le pidió un ejemplar de la obra que tanto estaba dando que hablar, y le convocó a una entrevista personal. Rizal regresaba dispuesto a asentarse de nuevo en las islas y a abrir un consultorio médico en Calamba, su ciudad natal. Terrero le prestó su apoyo e incluso llegó ponerle como protector a un teniente de la Guardia Civil, José Taviel de Andrade, con quien Rizal llegó a establecer una gran amistad. Sin embargo, la estancia de Rizal sólo duró seis meses, debido a las presiones que se originaron a su alrededor. A consecuencia de ello, a fin de garantizar su seguridad y la de su familia, en

³³ Idem.

³⁴ J. RIZAL, *Noli me tangere*.

³⁵ W. RETANA, *Vida y Escritos del Dr. José Rizal*. A. CRAIG, *Lineage, Life and Labors of José Rizal*. J.N. SCHUMACHER, *The Propaganda Movement*. N. JOAQUIN, *A Question of Heroes*. G. ZAIDE, *José Rizal: Life, Works and Writings*. L.M. GUERRERO, *The First Filipino: a biography of José Rizal*. B. ANDERSON, *Under three flags*. A. OCAMPO, *Rizal without the overcoat*. A. OCAMPO, *Meaning and History. The Rizal Lectures*. J.N. SCHUMACHER, *The Making of a Nation*. H. GOUJAT, *Réforme ou révolution?* MD. ELIZALDE, ed., *Entre España y Filipinas, José Rizal, escritor*. MD. ELIZALDE, "El tiempo de José Rizal".

³⁶ En la novela, Crisóstomo Ibarra, el personaje principal, un ilustrado filipino, descendiente de peninsulares, vuelve a Filipinas después de una larga estancia en Europa -siete años de estudios en Alemania-, dispuesto a abrir un colegio en el que instruir a las nuevas generaciones, y a casarse con su amor de juventud. Sus propósitos se ven frustrados por diversas vicisitudes que Rizal aprovecha para presentar los distintos grupos sociales que conviven en el archipiélago, para reflejar los problemas del régimen colonial y de la sociedad isleña, y para trazar un durísimo retrato de los frailes. A través de los diálogos de los distintos personajes, el autor plantea diferentes vías para conseguir la regeneración política y social, inclinándose en el discurso final por el camino de la reforma y la educación. De ella decía Rizal: «El libro contiene, pues, cosas de las que nadie entre nosotros ha hablado hasta el presente; son tan delicadas que no pueden ser tocadas por ninguna persona. En lo que a mí me toca, he intentado hacer lo que nadie quería. Yo he querido responder a las calumnias que por tantos siglos han sido amontonadas sobre nosotros y nuestro país: he descrito el estado social, la vida, nuestras creencias, nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestras quejas, nuestras tristezas...» J. RIZAL, *Correspondencia epistolar*, cita en «A Félix Resurrección Hidalgo», 5 marzo 1887, p. 91.

febrero de 1888, Rizal decidió alejarse de nuevo de Filipinas y emprender un largo periplo³⁷. En algunos círculos era ya una persona de gran influencia, en quien se veía al padre de la incipiente nación filipina. Sin embargo, otros grupos, y entre ellos las órdenes religiosas y sectores afines, se sintieron directamente atacados por la novela, pidieron la censura de la obra y la criticaron con gran dureza, iniciando una campaña contra Rizal, contra su familia y contra los que apoyaban sus ideas.

El conflicto de Binondo

El gobernador y los religiosos volvieron a chocar en un incidente ocurrido en Binondo, el barrio de los negocios en Manila, en 1887. Allí se encontraba el gremio de mestizos chinos más importante del archipiélago. Debido a su histórica relación con la tierra de Binondo, y al relevante papel que desempeñaban en el distrito, los mestizos chinos ocupaban una posición preferente en todas las ceremonias públicas que se celebraban allí, manteniendo la preferencia sobre el gremio de naturales, asunto que había causado numerosos enfrentamientos entre ambos. En 1887, con ocasión de las celebraciones de La Naval en honor a la Virgen del Rosario, una de las manifestaciones religiosas más importantes del archipiélago, volvió a suscitarse la cuestión de la precedencia. El gremio de mestizos la reclamó para sí, dada su posición y el hecho de que fueran quienes más contribuían económicamente a los actos, obteniendo el respaldo del párroco para ello³⁸.

El gobernadorcillo de Binondo decidió elevar una queja al gobernador civil de la provincia de Manila, reclamando la protección a los naturales de las islas frente a los privilegios concedidos a la población de origen chino, amenazando veladamente con conflictos raciales que podrían alcanzar una dimensión internacional. El asunto generó una tensa correspondencia entre el gobernador civil y el párroco que finalizó con la intervención de Terrero. El gobernador general, contraviniendo el comportamiento que se había seguido habitualmente en esta cuestión, apoyándose en un decreto promulgado el 27 de noviembre de 1840 que otorgaba la preferencia a los naturales en todos los actos de carácter público, y subrayando que no debía haber entre los nacidos en Filipinas ninguna clase de privilegios ni supremacías, resolvió por decreto de 14 de noviembre de 1887 que a partir de entonces, siempre que concurrieran en un acto público, civil o religioso, sería el gremio de naturales el que ocuparía el primer lugar, el gremio de mestizos chinos, el segundo, y el de chinos, el tercero. Lo cual implicaba que ese año sería el gremio de naturales quien tuviera la precedencia en las celebraciones de La Naval.

Los mestizos y los chinos católicos decidieron entonces retirarse de los actos, anulando su contribución a los ocho días de fiesta previstos. En esa situación, el párroco de Binondo, el dominico José Hevia Campomanes, se opuso a la decisión del gobernador general, suspendiendo la procesión por falta de fondos y ordenando retirar los bancos de la iglesia y que los fieles acudieran a la misma solo a título personal, pero no como representantes de ningún gremio, para evitar así disputas respecto a la precedencia. Terrero entendió tal acción

³⁷ Periplo que en los cuatro años siguientes le llevaría a Hong Kong, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, y, durante unos breves meses, de agosto de 1890 a enero de 1891, a España.

³⁸ AHN, Ultramar, 5318. Un detenido estudio de todo el proceso en A. DÍEZ MUÑOZ, "Binondo : foco de conflictos político-religiosos... »

como una grave desobediencia a su orden, decidiendo como vicepatrono real la destitución del párroco, lo cual causó el consecuente revuelo³⁹. El arzobispo y el provincial de los dominicos apuntaron que el apartamiento de un párroco era un problema canónico que debía resolverse por otros cauces, pero aun así, para soslayar mayores problemas, recomendaron acatar la orden, aunque dejando entrever el malestar existente. La cuestión, que podía parecer un asunto de meras celebraciones festivas y religiosas, reveló una lucha interna de poderes y causó gran tensión social en Binondo, que se siguió reflejando durante un tiempo, a pesar de que al año siguiente, por decisión gubernamental, se volvió a la organización tradicional de las celebraciones de La Naval⁴⁰.

La agitación provocó, además, que los filipinos agrupados en el gremio de naturales solicitaran que las órdenes religiosas abandonaran las islas, lo cual aumentó las tensiones existentes entre las congregaciones y el gobernador. Los círculos conservadores recordaron en aquella ocasión, una vez más, que la política necesaria en las islas era el mantenimiento del *statu quo*, y no la promoción de cambios que solo causaban inseguridad social y disidencias⁴¹.

La cuestión de los enterramientos

Finalmente, hubo una última -y definitiva- cuestión que enfrentó gravemente a la administración y a los religiosos. El tema podía parecer menor, una cuestión que podía haberse resuelto con un poco de diálogo entre las partes, pero evidenció que tras el contencioso había un turbulento y profundo mar de fondo en el que se dirimían posturas ante distintas formas de gobernar Filipinas y una clara lucha de poder entre diferentes instancias políticas y eclesiásticas⁴².

El problema se planteó cuando en el otoño de 1887, el director de la Administración Civil, Benigno Quiroga, siguiendo órdenes superiores consistentes con la nueva política sanitaria que se estaba intentando implantar en las islas, dictó una norma que prohibía la conducción de cadáveres a las iglesias y la celebración de funerales de cuerpo presente por motivos de higiene y salud pública⁴³. El 18 de octubre, Quiroga tramitó la orden vía gobernadores civiles y gobernadorcillos; al día siguiente fue publicada en la *Gaceta de Manila*; una semana después, el 25 de octubre, se la comunicó oficialmente al arzobispo; y el 23 de noviembre Terrero la trasmitió por decreto a todo el archipiélago. Sin embargo, en ese proceso se alteró el procedimiento habitual de que fueran los párrocos quienes dieran las órdenes a los gobernadorcillos, y los religiosos se vieron en la tesitura de tener que cumplir una directriz

³⁹ Posteriormente el padre Hevia fue nombrado obispo de Vigan y tuvo una larga y sacrificada trayectoria en las islas.

⁴⁰ La Real Orden de 12 de octubre de 1888 dejó sin efecto el decreto de Terrero y la precedencia entre gremios en Binondo volvió a ser como siempre, con los mestizos chinos primero, los naturales después y los chinos al final.

⁴¹ Edgard Wickberg ha analizado el enfrentamiento entre los gremios de mestizos chinos y naturales, así como la correspondencia que ambos mantuvieron con el gobernador general, señalando que más que una batalla menor por cuestiones de prestigio social, el asunto se reveló como un problema de largo alcance entre sectores civiles y religiosos, acrecentado por el creciente sentimiento anticlerical que se estaba desarrollando en las islas. E. WICKBERG, *The Chinese in Philippine Life*, pp. 137-139. También trata sobre el tema y sobre el papel de los mestizos chinos en el archipiélago R. COMENGE, *Cuestiones Filipinas*, pp. 216-224.

⁴² AHN, Ultramar, 5266/2º, Exp. 26. Estos conflictos entre autoridades civiles, eclesiásticas y órdenes religiosas han sido estudiados también por Roberto Blanco en su excelente obra *Entre frailes y clérigos*.

⁴³ Sandro Jiménez está realizando en el CSIC una tesis doctoral sobre política sanitaria y prácticas médicas en Filipinas.

que emanaba de los mandatarios filipinos. Muchos párrocos se negaron a cumplir la directriz, aludiendo a creencias y prácticas religiosas profundamente arraigadas a nivel social. Ante ello, Terrero dio orden de proceder contra los religiosos que no acataran la norma dictada. El arzobispo de Manila, Fray Pedro Payo, trató de mediar con las parroquias, recomendando que se siguiera la instrucción hasta que no llegara la contraorden desde la Península, no porque estuviera conforme con lo dictado, sino para evitar problemas mayores⁴⁴.

No obstante, el conflicto no quedó ahí. A consecuencia de esos enfrentamientos, tanto el arzobispo como los representantes de las órdenes religiosas iniciaron presiones en Madrid solicitando la destitución de Terrero y de sus colaboradores, por considerarles poco adecuados para el puesto y responsabilizarles del malestar social en el archipiélago, al promover una política que solo podía conducir al desafecto de las islas. Desde los sectores religiosos se les acusaba, además, de provocar el menoscabo de los curas párrocos, no tener en cuenta la opinión del arzobispo y ser excesivamente permisivos y amigables con los filipinos, a los que estaban prestando, con esa actitud, nuevas alas para sus aspiraciones separatistas⁴⁵.

En respuesta a las acciones de los religiosos, el 9 de enero de 1888, 476 filipinos de inspiración liberal enviaron a la reina regente un manifiesto en el que apoyaban las reformas introducidas por las autoridades coloniales que entonces regían la vida política del archipiélago:

Las dignísimas Autoridades que gobiernan esta provincia ultramarina, ora reparando agravios, reivindicando derechos legítimos hallados, ora excitando a las autoridades locales al mejor desarrollo de la enseñanza pública, dictando a la par reglas encaminadas a mejorar la higiene y salubridad, son dignos, por cierto, todos ellos, de mejor gratitud y elogio patentizando una vez más el celo e interés que el porvenir y bienestar de estos pueblos inspira al acendrado patriotismo del Sr. Gobernador General D. Emilio Terrero y del Excmo. Director General de Administración Civil D. Benigno Quiroga Ballesteros, así como también del Ilmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia de Manila D. José Centeno García⁴⁶.

En el escrito mencionaban también el problema suscitado en torno a los enterramientos, decantándose en favor de las posiciones mantenidas por las autoridades coloniales frente a los eclesiásticos:

...En las últimas medidas tomadas vislumbra el país la Aurora de su verdadera instrucción, puesto que la enseñanza y la salud públicas, son la Suprema ley de los pueblos y en este sentido se preconizaron disposiciones sanitarias encaminadas a regularizar la situación y condiciones de los cementerios y prevenir los funestos resultados para la salubridad ofrece la forma antihigiénica con que se venían verificando los funerales. No faltaron elementos que solo vieron en ello la posible pretensión de sus intereses más o menos lucrativos ... formularon acusaciones que al mismo tiempo calumnian a la clase popular... los señores Quiroga y Terrero supieron

⁴⁴ Esta cuestión la ha tratado en profundidad X. HUETZ DE LEPMS, "La controversia de las sepulturas en Filipinas".

⁴⁵ W. RETANA, *Weyler...*, pp. 391-392.

⁴⁶ AHN, Ultramar, 5258, Exp.53

colocarse a la altura de su poder... encareciéndole la necesidad de tales medidas y otras sean llamadas a impulsar el proyecto filipino...⁴⁷

Finalmente, en la misiva solicitaban que se ampliara el tiempo de mando en el país tanto del gobernador general como de Quiroga y de Centeno:

Los laudables y levantados propósitos que animan al Gobernador de estas Islas... encaminadas todas al progreso y bienestar de este Archipiélago... los pueblos filipinos no pueden mirar con ingratitud tan nobles sentimientos. Y deseosos de ver sostenidas dichas disposiciones y realizadas otras, que según se vislumbra, no han de ser tardías en ver la luz pública, se permite por tanto dirigir a S.M., la Reina Regente (q.D.g.) la adjunta sumisa exposición, rogándole, se sirva prologar el tiempo de mando en estas islas, del Excmo. Sr. D. Emilio Terrero y Perinat, acordando la permanencia de su elevado cargo de Director General de la Administración Civil del Excmo. Sr. D. Benigno Quiroga y Ballesteros, y el nombramiento de Gobernador Civil de Manila a favor del Ilmo. Sr. D. José Centeno y García, que con tanto acierto venía desempeñando dicho cargo interinamente⁴⁸.

Es interesante también observar cómo los filipinos, empleando un tono muy sumiso: "hacer llegar a los pies del trono su humilde voz", aprovecharon la ocasión para insistir en que no tenían más cauce para hacer oír su voz que escribir directamente a la Reina Regente, ya que carecían de representación parlamentaria:

Careciendo el pueblo filipino de representante en esa corte... comprenderá seguramente que ésta es la única forma posible, que podemos adoptar... Toda vez que por el conducto oficial hemos conceptuado ilusoria la realización de nuestro pensamiento puesto que tratándose de dicha exposición de la personalidad del Excmo. Sr. Gobernador General Terrero, nuestra dignísima superior autoridad, este Sr. por razones de delicadeza, rechazaría nuestro propósito y se verían frustrados nuestros más vehementes deseos⁴⁹.

La manifestación del 1 de marzo de 1888

Al poco tiempo, -semanas después de que Rizal se viera obligado a abandonar Filipinas-, el 1 de marzo de 1888 se organizó en Manila una gran manifestación a la que asistieron más de ochocientas personas, entre ellas un grupo de filipinos, mestizos y peninsulares de ideas avanzadas, presididos por un núcleo importante de gobernadorcillos y principales indígenas. Tras ella se entregó al gobierno, a través de Centeno, un nuevo manifiesto en el que se reiteraba el apoyo inequívoco al gobernador y a sus colaboradores, en una toma de partido muy clara en favor de la política reformista, que se consideraba muy beneficiosa para el país. Se acusaba, por contra, a los círculos afines a los religiosos de fomentar la inestabilidad, tratar de manipular las leyes y obstruir el progreso, por lo que se exigía la expulsión del arzobispo

⁴⁷ Idem.

⁴⁸ Idem.

⁴⁹ Solicitud firmada por Doroteo José, Rosendo Arionde, Jesús del Erioiro, Manuel Asunción, gobernadorcillos y principales del pueblo de Santa Cruz, arrabal de la ciudad de Manila, 9 de enero de 1888, AHN, Ultramar, 5258, Exp.53.

de Manila, Pedro Payo, la supresión de las órdenes religiosas, la secularización de los curatos y la incautación de las haciendas de los frailes⁵⁰.

Tras la manifestación, el Arzobispo de Manila, Fray Pedro Payo, elevó una exposición al Ministro de Ultramar en la que señalaba que los firmantes no eran responsables de sus actos, sino que habían sido engañados por los cabecillas de la conspiración, apoyados por algunas autoridades:

Basta conocer, Excmo. Sr., a estos naturales que tienen un respeto ciego, casi supersticioso, a los obispos, para comprender que las firmas, en su inmensa mayoría, han sido arrancadas por engaño, y esta es la opinión general de españoles e indígenas ilustrados respecto a este punto⁵¹.

El arzobispo defendía en su misiva que la manifestación tuvo un carácter antiespañol y separatista, acusando a la masonería de haberla provocado y a las autoridades de connivencia, ya que, según él, el gobernador general estaba enterado de todo lo que sucedía y el gobernador civil compartía las opiniones expresadas por los manifestantes. Señalaba, además, que la manifestación no se hubiera podido realizar sin su apoyo. Frente a las acusaciones que vertía sobre las autoridades coloniales, el arzobispo realizó una encendida defensa de la importancia del clero para el buen gobierno del archipiélago:

El clero regular... es la institución más poderosa, mejor dicho, la única existente en Filipinas, que puede sostener siempre incólume el pabellón de la patria en estas islas. Ellos forman como una especie de red, tendida por todo el territorio filipino, con la que España puede estar segura de cualquier clase de maquinaciones contra la integridad nacional. Ellos están identificados con el país que administran; conocen perfectamente sus necesidades, sus hábitos, sus costumbres... En Filipinas, si se prescinde de la capital, no hay otro elemento español que el religioso: los empleados de la administración están en continuo movimiento y el indígena no puede cobrarles verdadero afecto porque sabe que su residencia en el país es efímera... El regular en Filipinas es un elemento principalísimo de la vida de estos pueblos. Al nombre de párroco regular va unida la formación del pueblo, su conversión al cristianismo, la apertura de caminos vecinales, la erección de tribunales y escuelas...⁵²

En los sectores más afines a las órdenes religiosas, los acontecimientos ocurridos en torno al tema de las misas de corpore insepulto y a la manifestación consecuente les parecieron gravísimos. Acusaban a “elementos calificados de revoltosos” de aprovechar “el divorcio en que se hallaban las autoridades civiles y las eclesiásticas, debido á la intransigencia de las primeras” para solicitar “que fuesen expulsados de Filipinas todos los sacerdotes regulares, con el arzobispo Sr. Payo á la cabeza”. Denunciaban también el papel que José Centeno desempeñó en la trama al aceptar recibir aquel “infame papel en que se pedía la expulsión de los frailes, hecho sin precedente en la historia, inaudito, sin nombre”. Trataron de minimizar la protesta de los manifestantes señalando que “todo había sido obra de cuatro ó seis sujetos de malos antecedentes, y que los demás que firmaron la incalificable exposición, en número de setecientos, la firmaron engañados, sin saber lo que hacían”. Y concluían manifestando que

⁵⁰ R. MOJARES, *Brains of the Nation*, pp. 448-450.

⁵¹ Archivo de la Nunciatura de Madrid, Expediente 584, Título X, Rúbrica I—II.

⁵² Idem.

nada de eso “se habría verificado si en los señores Terrero, Quiroga y Centeno hubiera habido algún más tacto político, alguna más previsión y... ¿por qué no decirlo? mayor patriotismo del que probaron tener entonces”⁵³.

Aquella difícil relación triangular entre autoridades coloniales, sectores eclesiásticos y élites filipinas llegó a ser tan tensa que su eco llegó al parlamento peninsular. El 4 de mayo de 1888 el Sr. Pedregal⁵⁴, de inspiración liberal, interpeló al ministro de Ultramar en el Congreso pidiéndole explicaciones sobre el gravísimo conflicto entre las órdenes religiosas y las autoridades civiles con motivo de las circulares expedidas por el jefe de la administración civil sobre los enterramientos y sobre la manifestación celebrada unas semanas antes⁵⁵. Víctor Balaguer trató de restar importancia al asunto, indicando que no existía desacuerdo entre autoridades civiles y eclesiásticas: “marchan en completa armonía, como siempre”, calificando la manifestación de respetuosa, e informando que el asunto estaba en manos de los tribunales⁵⁶.

Y así era, en efecto. A instancias del gobernador general, y de acuerdo con la Junta de Autoridades, la cuestión de los enterramientos -que era la única que en realidad se podía juzgar, pues los demás motivos para el enfrentamiento no tenían una base jurídica sobre la que discutir- había pasado a manos de la justicia. Se nombró al presidente de la Audiencia de Manila como juez especial, el cual aceptó el caso dada “la gravedad del suceso, la importancia que la opinión pública concedía al asunto, la condición de los manifestantes, el carácter oficial de algunos, la forma en que se ha llevado a cabo dicha manifestación y por ir dirigida contra la primera autoridad eclesiástica del archipiélago y las órdenes religiosas”⁵⁷.

Aquella hubiera sido una ocasión para que el gobierno metropolitano decidiera qué era preferible para un gobierno ultramarino, para una buena relación con los filipinos y para la propia aceptación del régimen colonial, si contar con el apoyo de élites autóctonas tan

⁵³ W. RETANA, Weyler..., pp. 21-22.

⁵⁴ Había dos diputados con el mismo apellido en 1888: Manuel Pedregal y Cañedo, ex ministro de Hacienda y entonces miembro del partido centralista con Salmerón, Labra y Azcárate, y Antonio Pedregal y Guerrero, cura andaluz miembro del partido republicano federal de Pi y Margall.

⁵⁵ *Diario de Sesiones de las Cortes* (DSC), Legislatura 1887-1888, Tomo VI, 4 de mayo de 1888, pp. 3070-3071.

⁵⁶ Pedregal le contestó que “en cuanto a que la situación en el archipiélago es grave lo pone en evidencia la circunstancia de haber quedado cesante el Gobernador civil”. El Ministro respondió a su vez que el cese lo pidió el Director de la Administración Civil, y la Junta de Autoridades lo aceptó.

⁵⁷ AHN, Ultramar, 2249, Exp. 62. Finalmente, el caso se complicó tanto que se decidió que el asunto se dirimiera en la sección de Administración y Fomento del ministerio de Ultramar, que dictaminó que la circular que había enviado la Administración Civil de Filipinas no se basaba realmente en las normas anteriores que citaba, porque éstas no hablaban expresamente del caso de los funerales de corpore insepulto. La cuestión se transformaba así en un simple mandato que la dirección general de Administración Civil había considerado conveniente dictar, sin que constara ni se oyera el parecer de aquellas corporaciones relacionadas con la materia. Con esa declaración se desautorizó al director de Administración Civil para dictar la circular, al arzobispo por publicar la desobediencia de la norma en el Boletín Eclesiástico y al gobernador general por dictar el decreto de 23 de noviembre de 1887, ya que la ley de Sanidad de 1885 vigente en Filipinas decía que las reglas higiénicas debían acordarse por el gobierno de Madrid. Según el ministerio de Ultramar ninguno de los implicados en el caso tenía facultades para adoptar las disposiciones que dictaron. Sin embargo, lo que se consideró más grave en ese asunto fue la circulación de la nota dictada por Quiroga el 4 de noviembre de 1887, que decía así: “Con las indicaciones que ya privadamente de palabra, ya públicamente desde el púlpito, y en términos más o menos impropios de aquel sagrado lugar, les han dirigido sus devotos curas párrocos...” Esas frases, aparecidas en la *Gaceta de Manila*, fueron calificadas por la sección del ministerio de Ultramar de insensatas, señalando que era preciso ignorar no ya la historia de Filipinas, sino la de la nación española, para desconocer cuánta lucha, cuánto sacrificio y cuántas pérdidas había costado al país mantener los principios de la fe católica, y lo equivocado que era que desde una dirección de la Administración se denostara el mensaje que los párrocos difundían desde los pulpitos. NAVASQUILLO, *Gobierno y política...*, pp. 516-536.

destacadas como los gobernadorcillos, los círculos reformistas, o Rizal y los ilustrados, y poder negociar con ellos las reformas que solicitaban como una forma de conseguir su respaldo para el sistema, o perder esa baza del entendimiento directo, pero poder seguir contando con el apoyo y colaboración de las órdenes religiosas y de aquellos sectores de la administración colonial que pensaban que la mejor forma de mantener la soberanía española en las islas era el mantenimiento del *statu quo*, el férreo control de la población y la represión de todo movimiento discordante.

Es significativo al respecto que la cuestión concluyera con la destitución de Emilio Terrero, hecha, eso sí, con muy buenas palabras y justificándola porque había cumplido el plazo ordinario que le correspondía:

Vengo a disponer que el Teniente General D. Emilio Terrero y Perinat, cese de los cargos de Gobernador General Capitán General de las islas Filipinas, por haber cumplido el plazo ordinario para su desempeño quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que los ha acompañado⁵⁸.

En la evidente tensión existente en este período, una situación que despertó todas las alarmas en la Península, que quería evitar a toda costa una mayor conflictividad social, los grupos más conservadores y las órdenes religiosas demostraron tener más influencia y mayores apoyos que el gobernador general, el mecanismo sobre el cual en teoría residía todo el poder colonial⁵⁹.

Tanto entre políticos de la metrópoli como entre las fuerzas vivas del archipiélago -los textos de Retana son buena prueba de ello-, estos hechos despertaron apasionadas reacciones, con frecuencia airadas, en contra del gobernador Terrero y sus subordinados, a quienes se acusó de poner en peligro la soberanía española sobre las islas, dando nuevas alas a los sectores separatistas, que entonces parecían, a ojos de esos círculos, un sector que era absolutamente necesario controlar y reprimir. En ese contexto, las lecturas históricas que han prevalecido del mandato del gobernador general de Filipinas Emilio Terrero no han hecho justicia a la labor que desempeñó en el archipiélago, a la política reformista seguida en el período, ni a los intentos por aproximar posiciones con la población de las islas, atendiendo algunas de sus demandas. Han predominado, sobre todo, las valoraciones negativas respecto su actuación al frente del gobierno general, en especial por las discrepancias mantenidas con las órdenes religiosas, por las tensiones creadas en la lucha entre el poder civil y el religioso y por el malestar social que entre determinados círculos generaron algunas de sus actuaciones. Quizás sea hora de emprender una revalorización histórica sobre este gobernador.

⁵⁸ Destitución del teniente general D. Emilio Terrero y Perinat como gobernador capitán general del archipiélago. La reina regente en R.D. de 15 de Marzo de 1888. AHN, Ultramar, 5258, Exp. 42.

⁵⁹ La otra conclusión de este proceso fue la inmediata derogación de las disposiciones de Quiroga. Nada más partir Terrero de las islas, durante el mando interino de D. Antonio Moltó, general segundo cabo, se dio pública noticia en la *Gaceta de Manila* de una Real orden con la que se derribaba todo lo estipulado por la Dirección Civil. Manila, 12 de Mayo de 1888. Se decidió que, a fin de “armonizar los siempre venerados intereses de la Iglesia con las necesidades por la higiene proclamadas”, se construyeran capillas para los enterramientos, siguiendo unas normas precisas para ello. Y mientras “la construcción de las capillas se realiza, se permitirán en las iglesias exequias de cuerpo presente por sólo el tiempo de duración de las mismas, siempre que el estado de la salud pública lo consienta, y el estado del cadáver, encerrado en una caja, no ofrezca signos evidentes de peligro, á juicio del facultativo ó la autoridad que certifique la defunción”. W. RETANA, *Weyler...*, pp. 389-390.

BIBLIOGRAFÍA

ANDERSON, Benedict, *Bajo tres banderas. Anarquismo e imaginación anticolonial*, Madrid, Akal, 2008.

BLANCO, Roberto, *Entre frailes y clérigos. Las claves de la cuestión clerical en Filipinas*, Madrid, CSIC, 2013,

CAULÍN MARTÍNEZ, Antonio, "Retana y la historiografía filipinista", *Revista Española del Pacífico*, 4 y 6, 1994 y 1996.

CELDRÁN, Julia, *Instituciones hispanofilipinas del siglo XIX*, Madrid, Mapfre, 1992.

CELDRÁN, Julia, "La administración municipal de Filipinas en el último tercio del siglo XIX: reformismo versus autonomismo", en Manuel Torres Aguilar (coord.), *Actas del XV congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, Córdoba, Diputación de Córdoba; Universidad de Córdoba, 2008; tomo I, pp. 81-110.

CRAIG, Austin, *Lineage, Life and Labors of José Rizal*, Manila, 1913.

COMENGE, Rafael, *Cuestiones Filipinas. Primera parte. Los chinos*, Manila, Chofré y Cía., 1894.

CUBEIRO, David, *Comunicaciones, Infraestructuras y Desarrollo en Filipinas: De la administración española a la norteamericana, 1875-1935*, Tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra, Octubre 2011.

DÍEZ MUÑIZ, Adolfo, "Binondo: Foco de conflicto político-religioso entre gremios de naturales y sangleyes", *Hispania Sacra*, 43, 1991, pp. 647-676.

ELIZALDE, María Dolores, *España en el Pacífico: la colonia de las islas Carolinas y Palaos, 1885-1899*, Madrid, CSIC, 1992.

ELIZALDE, María Dolores, ed., *Entre España y Filipinas, José Rizal, escritor*, Madrid, AECID-Biblioteca Nacional de España, 2011.

ELIZALDE, María Dolores, "El tiempo de José Rizal", en *Entre España y Filipinas, José Rizal, escritor*, Madrid, AECID-Biblioteca Nacional de España, 2011, págs. 29-72.

España en Fin de siglo, Apuntes biográficos del Excmo. Sr. Teniente General D. Emilio Terrero y Perinat, págs. 285-286.

http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/catalogo_imagenes/image.n.cmd?path=1027058&posicion=11. Consultado el 20 de abril de 2016.

GOIJAT, Hélène, *Réforme ou révolution ? Le projet national de José Rizal (1861-1896) pour les Philippines*, Paris, Connaissances et Savoirs, 2010.

GUERRERO, León M., *The First Filipino: a biography of José Rizal*, Manila, National Historical Institute, 2001.

HUETZ DE LEMPS, Xavier, "La controversia de las sepulturas en Filipinas. El cementerio, escenario de tensiones entre el poder colonial y el clero (finales del s. XVIII - finales del s. XIX). En Gonzalo Álvarez Chillida, María Dolores Elizalde y Xavier Huetz de Lemps eds., *Misión católica y poder colonial. Cooperación y conflicto en la renovación de los imperios ibéricos, 1808-1930*, Madrid, Casa de Velázquez, en prensa

ILETO, Reynaldo, *Magindanao, 1860-1888: The Career of Datu Utto of Buayan*, Manila, Anvil Publishing Inc., 2007.

INAREJOS, Juan Antonio, *Los (últimos) caciques de Filipinas. Las élites coloniales antes del 98*, Granada, Comares Historia, 2015.

JOAQUIN, Nick, *A Question of Heroes: Essays in Criticism on Ten Chief Figures of Philippine History*, Makati, Ayala Museum, 1974.

LUENGO, Pedro, «El monumento a Carlos IV en Manila. Obra de Juan Adán», en *Academia. Anales y Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando*, vol. 108/109, 2009, págs. 75-78.

MOJARES, Resil, *Brains of the Nation*, Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 2006.

MONTERO Y VIDAL, José, *El archipiélago filipino y las islas Marianas, Carolinas y Palaos*, Madrid, Imprenta y Fundición Manuel Tello, 1886.

NAVASQUILLO SARRION, Carmen, *Gobierno y política de Filipinas bajo el mandato del general Terrero (1885-1888)*, Tesis Doctoral leída en 2002 en la Universidad Complutense de Madrid, dirigida por Leoncio Cabrero.

OCAMPO, Ambeth, *Rizal without the overcoat*, Manila, Anvil, 2008.

OCAMPO, Ambeth, *Meaning and History. The Rizal Lectures*, Manila, Anvil, 2011.

RETANA, Wenceslao, *Mando del General Weyler en Filipinas*, Madrid, Imprenta de la Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1896.

RETANA, Wenceslao, *Vida y Escritos del Dr. José Rizal*, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1907.

RIZAL, José, *Noli me tangere. Novela tagala*, Berlín, Berliner Buchdruckerei-Actien-Gesellschaft, 1886.

RIZAL, José, *Correspondencia epistolar. Libro Tercero. Cartas entre Rizal y sus compañeros de La Propaganda*. 1ª parte, Manila, Comisión Nacional del Centenario de José Rizal, 1961.

SÁNCHEZ, Luis Ángel, *Un imperio en la vitrina. El colonialismo español en el Pacífico y la Exposición de Filipinas de 1887*, Madrid, CSIC, 2004.

SCHUMACHER, John N., *The Propaganda Movement, 1880-1895*, Manila, Solidaridad Publishing House, 1973.

SCHUMACHER, John N., *The Making of a Nation*. Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 1991.

WICKBERG, Edgar, *The Chinese in Philippine Life, 1850-1898*, Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 2000.

ZAIDE, Gregorio *José Rizal: Life, Works and Writings*, Manila, National Bookstore, 1984.